



República de Colombia



Sala Cuarta de Decisión Laboral

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Magistrada Ponente

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO LABORAL - **SENTENCIA**
RADICACIÓN. 05001 31 05 **015 2019 00436 01**
DEMANDANTE: ELIZABETH RAMÍREZ VARGAS
DEMANDADOS: ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS REEDUCADORES
EGRESADOS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS
AMIGÓ - ASPERLA y el INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR – REGIONAL ANTIOQUIA

Medellín, catorce (14) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se reunió la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por las Magistradas LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, quien actúa como ponente, con la finalidad de resolver recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida el 10 de febrero de 2021, por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín.

I. ANTECEDENTES

Pretende la demandante que se declare la nulidad de la cláusula n.º 15 compromisoria insertada en todos los contratos suscritos, por ser una de adhesión y no existir voluntad de las partes al haberse configurado un contrato de trabajo bajo la teoría de la realidad sobre las formalidades; se declare que existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido con los demandados vigente entre el 14 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2018, el cual terminó en forma ilegal e injusta; en consecuencia, que se condene a las demandadas de manera solidaria al tenor de lo dispuesto en el art. 34 del CST, al pago de las cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y sanciones por no consignación de las cesantías causadas a lo largo de los años que prestó sus

servicios y teniendo en cuenta los salarios descritos en la pretensión condenatoria n.º 1 (págs. 6-8 arch. 1.1.3 C01), junto con la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo y la indexación de las sumas adeudadas (págs. 5-9 arch. 1.1.3 C01).

Como fundamentos fácticos relevantes, expuso que se vinculó laboralmente a Asperla desde el 14 de agosto de 2014 en calidad de psicóloga terapéutica para atender pacientes remitidos por el ICBF – Seccional de Antioquia, a cambio del pago de los salarios señalados en el hecho 2º de la demanda; cumplió un horario, le asignaron metas semanales y mensuales y recibió órdenes de su jefe inmediata y del Gerente de Proyecto; inicialmente realizó las labores en las instalaciones del ICBF del municipio de Puerto Berrio, luego fue trasladada al municipio de Rionegro y posteriormente a Medellín, en donde ejecutó sus funciones en las instalaciones de Asperla, en uso de los insumos, muebles y computadores suministrados por dichas entidades y siempre en beneficio de los pacientes remitidos por el ICBF; Asperla le pagó los aportes a la seguridad social por algunos períodos, pero nunca le canceló las prestaciones sociales.

Manifestó que en varias oportunidades, Asperla omitió realizar los presuntos contratos de prestación de servicios, pues a pesar de que laboró todo los años completos, solamente se suscribían tales documentos por un tiempo determinado como por ejemplo entre el 15 de febrero y el 31 de marzo de 2016; Asperla era quien le fijaba las citas y le asignó una secretaria que le colaboraba en sus actividades diarias; Asperla tiene un vínculo legal con el ICBF; el 12 de febrero de 2019 reclamó administrativamente ante el ICBF – Seccional Antioquia, sin embargo, la entidad respondió en forma negativa a través de comunicación del 22 de marzo siguiente (págs. 2-4 arch. 1 C01).

II. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 30 de julio de 2017 se admitió la demanda y se ordenó la notificación y traslado a los demandados (págs. 120-121 arch. 1.1.3 C01), quienes contestaron dentro del término de traslado.

Asperla se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda con el argumento de que la demandante se vinculó mediante varios contratos de prestación de servicios de carácter civil y fungió como psicóloga especializada en

la modalidad de intervención de apoyo -hoy servicio complementario, apoyo psicológico especializado-, para atender niños, niñas, adolescentes, familias y redes de apoyo, remitidos por las autoridades administrativas y judiciales competentes (jueces, defensores y comisarios de familia) en articulación con el ICBF y teniendo en cuenta que la asignación de citas, horarios y atención de cada caso en particular la realizó la demandante en forma autónoma e independiente a cambio del pago de honorarios profesionales.

Propuso como excepciones de mérito las denominadas inexistencia de contrato de trabajo entre las partes, inexistencia de la obligación, buena fe de Asperla, mala fe de la demandante, prescripción, y pago con paz y salvo; interpuso igualmente como excepciones de carácter previo la de cláusula compromisoria y falta de jurisdicción y competencia (págs. 133-140, 149, 150, 216 arch. 1.1.3 *idem*), las cuales se declararon no prósperas en la audiencia de que trata el art. 77 del CPTSS (archs. 6, 8 *idem*).

El **ICBF** contestó con oposición, con el argumento de que los contratos que hubiera suscrito la demandante con Asperla, son totalmente ajenos e independientes al ICBF, en virtud del principio de autonomía con la que cuentan los operadores y asociaciones para contratar a su planta de personal, sin que la entidad tenga injerencia alguna en ello pues los contratos de aporte suscritos con Asperla son de naturaleza estrictamente administrativa; propuso como excepciones de mérito las de falta de legitimación en la causa por pasiva, imposibilidad jurídica del ICBF para celebrar contratos de trabajo, ausencia de relación laboral, legal o reglamentaria entre las partes, inexistencia o falta de causa para demandar, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, inexistencia de solidaridad prestacional, ausencia de solidaridad patronal prescripción, buena fe (págs. 181-196, 216 arch. 1.1.3 *idem*).

Llamó en garantía a Seguros del Estado SA y a Seguros Generales Suramericana SA, con base en las cláusulas 9ª y 10ª estipuladas dentro de los contratos de aporte n° 1147 de 2017 y 835 de 2018, respectivamente, celebrados con Asperla, quien suscribió las pólizas de garantía correspondientes con dicha aseguradora (págs.. 206-215 arch. 1.1.3 *idem*), lo cual a pesar de haber sido admitido mediante auto del 13 de diciembre de 2019 (pág. 216 arch. 1.1.3 *idem*), fue declarado ineficaz en proveído del 13 de enero de 2022 al no haberse logrado la notificación dentro del término legal oportuno (arch. 5 C01).

La **Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado**, a pesar de haber sido comunicada de la existencia del proceso, guardó silencio (págs. 177, 178 *idem*)

III.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia celebrada el 10 de febrero de 2021, profirió sentencia en la que declaró que entre la demandante y Asperla existió una relación regida por contratos de prestación de servicios de naturaleza civil entre el 14 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2018, que no ha existido entre la parte actora y el ICBF un contrato de trabajo, ni le asiste responsabilidad solidaria alguna a la entidad; declaró probadas las excepciones de inexistencia del contrato de trabajo entre las partes formulada por Asperla y la de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el ICBF. En consecuencia, absolvió a las demandadas de las pretensiones incoadas en su contra e impuso costas a cargo de la demandante.

Motivó la decisión en que, de las pruebas allegadas se puede concluir que la demandante no estaba obligada contractualmente al cumplimiento de un horario, ni estuvo sometida a subordinación alguna por parte de Asperla y podía dirigirse a cumplir sus funciones en la sede respectiva en el momento en que quisiera hacerlo mientras estuviera abierta la misma, sin que pueda confundirse el alto volumen de citas que le implicaba a la demandante permanecer una cantidad de horas allí, ya que incluso podía ejecutar sus servicios de forma remota desde su casa, y no tenía el deber de pedir permiso alguno para ausentarse, sino solo informar la novedad.

Agregó que no existe medio probatorio alguno que dé indicios de vinculación de la demandante al ICBF como empleadora, por lo que no es procedente analizar su responsabilidad solidaria, tampoco lo referente a la nulidad de la cláusula compromisoria, por sustracción de materia y tratarse de una relación contractual netamente civil, lo que además se encuentra fuera de las competencias asignadas a la jurisdicción ordinaria laboral (archs. 9, 120 C01).

IV. RECURSO DE APELACIÓN

La demandante argumentó que ha debido declararse la nulidad de la cláusula compromisoria por ser una de adhesión, ya que todos los trabajadores que querían prestar sus servicios en una entidad, debían firmar el contrato, por tanto no era autónoma en poder decidir si firmar o no el documento para poder desempeñarse como psicóloga, aunado a que se dan los presupuestos del art. 23 del CST para configurar un contrato de trabajo ya que prestó de manera personal el servicio, a cambio de un salario pagado por Asperla a título de honorarios y además se dio una subordinación al margen de ser una profesional en psicología que cumplió fielmente con los deberes impuestos sin necesidad de que estuvieran verificando el cumplimiento o no de las directrices de la empresa para recibir a los pacientes remitidos por el ICBF, sin poder desempeñar actividades distintas o delegarlas; agregó que Asperla suministró los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades y cumplir las metas semanales y mensuales impuestas.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Recibidas las diligencias en esta Corporación, mediante auto del 25 de abril de 2022 se admitió el recurso de apelación y conforme a lo normado en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, en auto del 8 de septiembre del mismo año, se dispuso correr el respectivo traslado a las partes para alegar (archs. 2, 3 C02), sin embargo, únicamente presentó alegaciones el ICBF reiterando los argumentos expuestos en la contestación (arch. 4 C02).

VI. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites de segunda instancia, sin causal de nulidad que invalide lo actuado, esta Colegiatura procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, y de conformidad con lo previsto en el art. 66A del CPTSS, el problema jurídico a resolver consiste en verificar la relación jurídica que se suscitó entre las partes con el fin de encontrar si se dieron los elementos constitutivos de un contrato de trabajo bajo la primacía de la realidad sobre las formalidades, para posteriormente establecer la viabilidad de las demás declaraciones y las condenas solicitadas, junto con la responsabilidad solidaria deprecada entre las codemandadas.

Para determinar la naturaleza jurídica del vínculo, es necesario verificar si concurren los elementos esenciales del contrato de trabajo, previstos en el art.

23 del CST, modificado por el art. 1º de la Ley 50 de 1990, que son la actividad personal del trabajador, la continuada subordinación o dependencia respecto del empleador y el salario como retribución del servicio, teniendo en cuenta la presunción legal prevista en el art. 24 *ibidem*, modificado por el art. 2º de la Ley 50 de 1990, respecto a que toda relación de trabajo personal se encuentra regida por un contrato de trabajo, correspondiéndole simplemente a quien alega su existencia, acreditar la prestación del servicio personal y, quien resiste la pretensión, debe derruir la presunción, desvirtuando la existencia de los demás elementos esenciales del contrato de trabajo, y acreditando los elementos de una relación de naturaleza jurídica distinta (CSJ SL10546-2014, CSJ SL10118-2015, y CSJ SL1420-2018).

Y demostrada la prestación personal del servicio, corresponde al funcionario judicial, con los medios probatorios aportados al proceso, establecer los extremos temporales en un determinado periodo, y con ello poder calcular los derechos laborales o sociales que le corresponderían al trabajador demandante (CSJ SL111-2018).

En el caso bajo estudio no se controvierte la prestación personal del servicio por parte de la demandante en favor de Asperla, pues la representante legal admitió en su interrogatorio de parte, que Elizabeth Ramírez le prestó servicios a dicha asociación como psicóloga mediante contratos de prestación de servicios desde el 2014 en el municipio de Rionegro, inicialmente, en una sede que al parecer hacía parte del ICBF; en ese sentido, informó que no se le fijaban metas semanales, eran simplemente obligaciones contractuales como con todos los psicólogos, quienes debían cumplir con un número de sesiones, pero no en forma obligatoria; que siempre se les pagaba por sesión hecha con total autonomía, conforme su propia programación, por lo que los pagos de los honorarios no eran fijos, sino variables, pues incluso hay momentos en los que por una semana no cumplen funciones porque se van de viaje, a pesar de que por su especialidad no pueden designar a un tercero externo en su reemplazo, porque esa persona tendría que ser avalada por la institución.

Agregó que la demandante simplemente notificaba cuando se iba a ausentar, sin que se hubiera presentado dificultad alguna; aclaró que si bien funge como representante legal desde el año 2021, antes de esta época fungió como Coordinadora, y aun cuando nunca fue Coordinadora de la demandante, sí la conocía como psicóloga al servicio de Asperla, porque prestaban servicios

para el mismo programa; informó que la institución notifica las obligaciones contractuales, porque tiene el deber de hacerlo, pero no se trata de un seguimiento o control, solo cuando la institución observa que no se cumplen tales obligaciones, se le envía un correo electrónico a los profesionales o se les llama en la misma fecha en que deben entregar los informes, para decirles qué estaba faltando, no obstante, nunca hubo llamados de atención o procesos disciplinarios en contra de la demandante por faltantes a las obligaciones contractuales, como se hace en un contrato laboral.

Manifestó que los elementos con los que prestó servicios la demandante se otorgan por la misma institución básicamente por el lineamiento técnico del ICBF, porque tal entidad otorga las licencias de funcionamiento a los consultorios en donde se realizan los servicios psicológicos, y Asperla a través de los recursos que da el ICBF, conforma esos consultorios, aunque hay otros recursos logísticos que son de total autonomía de la demandante; aclaró que hubo una secretaria que se encargaba de recopilar la información del departamento para poder tener las historias de los niños en buen estado, para enviarlas a las autoridades competentes, sin que se encargara de realizar labores en función de los psicólogos ni de la demandante como tal, porque su sueldo era pagado por Asperla al ser una Secretaria del programa.

Así las cosas, se tiene que la prestación de los servicios se encuentra plenamente acreditada, no solo con la confesión de la representante legal de Asperla, sino también con la prueba documental aportada, con los dichos de los testigos de la parte demandante Diana María Galeano y Alejandra María Correa Galeano, y las manifestaciones de Andrés Felipe Palacios Naranjo y Esteban Mejía Pinto, declarantes solicitados por Asperla, de quienes más adelante se analizarán sus relatos; empero, aun cuando la parte demandante, pretende que se dé aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre las formas, de la totalidad del material probatorio recaudado no es posible concluir que la prestación de estos servicios como profesional en psicología especializada fue continua y subordinada por lo siguiente:

El testigo **Esteban Mejía**, Psicólogo Clínico de Asperla desde el 16 de abril de 2016, indicó que fue compañero de la demandante porque estuvieron contratados bajo las mismas condiciones y en cumplimiento del mismo rol, es decir, a través de contratos de prestación de servicios para atender como profesionales los casos remitidos del ICBF, las comisarías de familia y los centros

zonales dentro del programa de psicología especializada; confirmó lo manifestado por la representante legal y agregó que los psicólogos imponen sus propios horarios, y puso como ejemplo que justamente para la época en que rindió su declaración, estaba en Madrid, España porque fijó su agenda de modo que pudiera hacer el viaje, por tanto, los psicólogos programan a los usuarios, de acuerdo al tiempo de estos últimos porque hay personas que tienen que trabajar, unos pueden solo por la mañana, otros en la tarde, así que los mismos contratistas organizan la programación, porque no son horarios impuestos por Asperla o por el ICBF, sino flexibles, pudiendo llegar a la hora que deseen depende del tiempo en que fijen las citas, sin verse sometidos a llamados de atención por el eventual incumplimiento de las mismas; si no se puede hacer la cita, simplemente se reprograma, ya que incluso hay pacientes que no quieren ir o nunca llegan, entonces en ese caso, deben informar al Defensor de Familia que el caso no se puede atender.

Informó que cada psicólogo tiene asignado un número de pacientes, sin embargo, en caso de que se presentara algún inconveniente se podía hacer el cambio de terapeuta eventualmente de la misma área, aunque aclaró que ello dista del hecho de delegar funciones a un tercero externo, pues esto último no está permitido; no tiene conocimiento de que la demandante haya efectuado esa delegación, ni que le hayan efectuado algún llamado de atención por sus viajes por fuera del país, solo debía informar a la Coordinadora y a sus pacientes para que tuvieran claro cuándo van a regresar a sus sesiones, ya que Asperla no sabe nunca cuándo son las citas, ni quiénes son los pacientes, porque la agenda es conforme al propio tiempo de cada psicólogo; que en los lapsos en los que no tienen consultas, los psicólogos pueden estar por fuera de la sede, haciendo otro tipo de labores a su libre albedrío.

Explicó que existen días en que no hay consultas porque el paciente no pudo asistir, y entonces el psicólogo no va a la sede a hacer acto de presencia, casi siempre son los lunes. Dijo que el pago de las cuentas de cobro, depende del número de sesiones que se atienden, y aunque a cada usuario se le debe hacer 4 sesiones, en determinadas circunstancias los usuarios no pueden comparecer a todas, cada sesión dura 45 minutos. Todos los psicólogos tienen un número distinto de pacientes, en la época en que él fue compañero de la demandante, tenía (el testigo) 25 pacientes, sin conocer cuántos pacientes tenía la demandante.

Recordó que cuando la demandante prestó servicios en Puerto Berrio y en Rionegro, Asperla hizo el cubrimiento de los gastos de transporte y de la renta, ya que los contratistas deben pagar los aportes a seguridad social y Asperla suministra algunos elementos; en esa misma data hubo más psicólogos desempeñándose junto con la demandante y él para el programa porque se debían cubrir 14 municipios; siempre se atienden a los usuarios y se hacen los informes, los cuales se podían elaborar en cualquier parte, en la oficina, en la casa, los fines de semana o a cualquier hora donde quisiera el profesional. Finalmente indicó que la secretaria que se encontraba en los centros, era contratada por Asperla, pero no para los psicólogos, solo contestaba las llamadas de los defensores y respondía por los temas administrativos de Asperla.

Estas situaciones fueron también corroboradas por Andrés Felipe Palacio Naranjo, testigo solicitado por Asperla y contratado como psicólogo por prestación de servicios por dicha empresa desde el año 2013, motivo por el cual conoce que la demandante prestó servicios como psicóloga del programa desde el 2014 hasta el 2018, en Puerto Berrio, Rionegro y Medellín, pero solo fueron compañeros en Medellín, y tuvieron las mismas condiciones de contratación, ya que siempre ha sido así con los psicólogos; que en relación con la prestación de los servicios de otros municipios solo sabe que Asperla le brindó un apoyo económico a la demandante para trasladarse cuando debía hacer las entregas mensuales de los informes; frente a los servicios en Medellín agregó que aun cuando el horario de la sede era de 7 am a 5 pm, la demandante podía fijar sus citas con los pacientes de manera libre dentro de esas horas, pero no significaba que debía cumplir un horario, solo debía estar en la institución dentro del tiempo que ella haya programado usuarios, si terminaba la atención nada la obligaba a quedarse en la institución, máxime cuando ella nunca recibió órdenes; informó que los psicólogos son contratados por 144 sesiones de 45 minutos cada una, pero ese número variaba dependiente de las sesiones que podían hacer en el mes y con lo cual se hacían las cuentas de cobro.

Indicó que para la atención de los usuarios, los psicólogos cuentan con un espacio que les brinda la institución teniendo en cuenta las exigencias del ICBF, porque deben contar dichos espacios con unas licencias de funcionamiento, y para su verificación el ICBF hace una visita cada 2 años, más otras visitas de supervisión del contrato que tiene con Asperla, que pueden ser 2 ó 3 veces durante el año

La testigo de la parte demandante, **Diana María Galeano Garcés**, fungió como psicóloga al servicio de Asperla entre enero de 2010 y agosto de 2011, desde mayo hasta diciembre de 2013 en el programa de atención terapéutica, todo el año 2014 fue la Coordinadora de ese programa, y de julio de 2017 a abril de 2019 volvió a ser psicóloga del programa de atención psicológica especializada, y aun cuando fue tachada por sospecha dado que tiene una demanda cursando en el Juzgado 7º Laboral del Circuito de Medellín, con similares pretensiones y hechos a los aquí ventilados, lo cierto es que ello no es suficiente para tenerla como interesada en las resultas del proceso (CSJ SL 13 jun. 2012 rad. 41198), máxime porque en este caso, debido al tiempo en que estuvo como colega y coordinadora de la demandante, le consta de primera mano las situaciones que narró, de las que se desprende una confirmación frente a lo manifestado tanto por la representante legal como por los testigos acabados de reseñar, y a ello adicionó que como jefe inmediata de la demandante nunca le hizo llamados de atención, sino que se le hacían orientaciones de cómo se debía prestar el servicio con base en los lineamientos que tiene el ICBF, con la precisión de que si bien en las sedes del ICBF y de Asperla los horarios de apertura eran de 8 am a 5 pm, la demandante para cumplir su labor, tenía la posibilidad de organizar su agenda dentro de ese tiempo con los beneficiarios que le asignaba Asperla, pues el horario era libre, así que podía cumplirlo o no, sin embargo, ante el volumen de consultas, casi siempre cumplía jornada completa, ya que debía hacer consultas todo el día en la sede en la que trabajaron juntas, porque tenían muchos usuarios, pero en cualquier momento podía irse.

En el mismo sentido, declaró y reafirmó todos estos relatos, la otra testigo de la demandante, **Alejandra María Correa Galeano**, quien laboró desde 1997 hasta 2017 con Asperla, mediante vinculación con contratos a término fijo e indefinido en calidad de Pedagoga, Directora Técnica y Coordinadora, razón por la cual le consta lo manifestado, porque fue compañera de la demandante en el programa de atención terapéutica; agregó a todo lo anterior que las consultas y el cronograma era organizado con la demandante y de acuerdo a la disponibilidad de los usuarios; que por lo general, cuando no habían consultas, la demandante permanecía dentro de la sede, haciendo los informes de las consultas o los informes que solicitaba el ICBF para audiencias o demás declaraciones que se tuvieran que hacer.

Dijo que la demandante hacía la elaboración de los informes y la impresión con ayuda del auxiliar administrativo o de la secretaria, y tenía consultas hasta

las 3 o 4 pm, aunque podía negociar para que pudiera salir antes; señaló que casi siempre la demandante cuadraba sus citas para todos los días, así que en algunas ocasiones tenía libres una o dos horas en las que como no tenía usuario, hacía otras actividades relacionadas con los informes, sin embargo, afirmó que estas labores administrativas, la demandante podía hacerlas por fuera de la sede, después de cumplir con su atención de los usuarios; incluso, si ella se debía ausentar por viajes o por alguna cita, sólo debía informar esa situación, frente a lo que recordó que cuando la demandante viajó fuera del país, ella misma reorganizó su agenda, sin que se le reasignaran los casos a otros psicólogos, pero no sabe si para ello, tuvo que pedir permiso, ya que para esa época la testigo fungía como Directora Técnica y la Coordinadora fue quien le informó del viaje, con la advertencia de que ella nunca le manifestó que ese ausentismo hubiera generado algún problema o traumatismo en el servicio, de manera que nunca se le presentaron quejas al respecto, por lo que asume que no hubo dificultad; situaciones que desacreditan lo manifestado por la demandante en su interrogatorio de parte, al afirmar que sus jefes directas le llamaron la atención por haberse ausentado durante un tiempo por un viaje que hizo fuera del país y por ello tuvo que rendir explicaciones.

Las manifestaciones de estos testigos fueron coherentes, afines y además confirmaron todo lo dicho por la representante legal de Asperla en su interrogatorio de parte, con lo que se concluye que la prestación de los servicios de la demandante, en verdad fue de manera independiente y sin injerencia alguna por parte de Asperla para el desarrollo de las labores, pues nótese cómo todos coincidieron en que los pacientes que los psicólogos como la demandante atendían, eran programados de acuerdo a la disponibilidad del tiempo de los contratistas y de los usuarios, por lo que aun cuando se debía ejecutar la labor dentro de las sedes de Asperla o del ICBF, era precisamente para seguir los lineamientos impuestos por esta última entidad, debido a las licencias de funcionamiento que otorga para las asociaciones.

No obstante lo anterior, del material hasta aquí reseñado no se desprende la continuidad en la prestación de los servicios, pues los testigos solo fueron compañeros de trabajo de la demandante por determinados períodos, no siempre, y debido a su profesión tenían claro los municipios en los que la demandante prestó los servicios, sin que se les hubiera efectuado preguntas contundentes tendientes a obtener extremos temporales precisos de los lapsos en los que hubieran ejercido actividades junto a la demandante; y de las pruebas

documentales, tampoco se logra extraer que Elizabeth Ramírez haya ejecutado sus labores de manera ininterrumpida entre el 14 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2018, pues se aportó una certificación suscrita por el Director Ejecutivo de Asperla, en la que consta que la demandante prestó sus servicios como Psicóloga Terapéutica a través de contratos vigentes en las fechas que más adelante se indicarán, sin embargo, se señaló que para el 28 de diciembre de 2018 – data de suscripción del documento- tenía un contrato vigente hasta el 30 de ese mes (págs. 23, 24 arch. 1.1.3 C01).

Las fechas indicadas en la mencionada certificación se constatan con los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos con duración definida en las siguientes fechas, entre Asperla como contratante y la demandante como contratista independiente, con el objeto de que esta última se desempeñara como Psicóloga a cambio de una suma de dinero (estipulada entre \$21.000 y \$29.000) por cada sesión ejecutada en el servicio de atención especializada desde el área de psicología en la modalidad de atención terapéutica mediante sesiones y/o citas atendidas en el día, dentro del centro zonal del ICBF asignado o en el espacio determinado por el contratante a quien debía presentársele para efectos del pago una cuenta de cobro con el detalle del número de sesiones atendidas; dentro de las obligaciones impuestas a la contratista se encuentra **i)** el realizar el seguimiento escrito a cada una de las intervenciones con los usuarios dejando la constancia en la historia que reposa en la sede administrativa del programa, **ii)** entregar los días 30 de cada mes el listado con el número de intervenciones realizadas junto con la firma de los usuarios atendidos y los soportes del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, lo que precisamente confirma las labores que indicaron los testigos y la representante legal, que fueron ejecutadas por Elizabeth en cumplimiento de los siguientes contratos:

n.º	Tipo de documento	Fecha inicio	Fecha fin	págs.	arch. C01
1	Inicio contrato	14-ago.-2014	31-oct.-2014	25-29, 151-155	1.1.3
2	Acuerdo Contractual Extensión	1-nov.-2014	15-dic.-2014	30	1.1.3
3	Inicio contrato	25-mar.-2015	30-jun.-2015	31-35, 156-160	1.1.3
4	Acuerdo Contractual Extensión	1-jul.-2015	30-sep.-2015	36	1.1.3
5	Acuerdo Contractual Extensión	1-oct.-2015	30-nov.-2015	37	1.1.3
6	Acuerdo Contractual Extensión	1-dic.-2015	31-dic.-2015	38	1.1.3
7	Inicio contrato	15-feb.-2016	31-mar.-2016	39-43, 161-165	1.1.3
8	Acuerdo Contractual Extensión	1-abr.-2016	30-nov.-2016	44	1.1.3

9	Inicio contrato	1-feb.-2017	30-nov.-2017	45-49, 166-170	1.1.3
10	Inicio contrato	1-dic.-2017	31-jul.-2018	50-54, 171-175	1.1.3
11	Extensión	1-ago.-2018	31-oct.-2018		1.1.3
12	Otrosí Extensión	1-nov.-2018	30-nov.-2018	55	1.1.3

Como se puede observar, entre los documentos n.º 2 y 3, hay un espacio de **100 días** entre la fecha de finalización de un contrato y la data de inicio del siguiente vínculo, mientras que entre los documentos n.º 6 y 7 hasta un espacio de **45 días**, y entre los documentos n.º 8 y 9 una interrupción de **60 días**, lo que desacredita la continuidad en la prestación de los servicios que alegó la demandante tanto en el libelo introductor como en su interrogatorio de parte cuando sostuvo que ejerció como psicóloga *sin parar*, y no permite contemplar la posibilidad de declarar una unicidad en el vínculo, debido a las importantes interrupciones que acaecieron en la ejecución de los contratos.

Ahora, es importante precisar que a pesar de que la demandante sostuvo que Asperla le pagó los aportes a la seguridad social, únicamente en el acuerdo contractual de extensión reseñado con el n.º 5 del cuadro anterior se dispuso que *«el valor cancelado por concepto de seguridad social será asumido por la institución a partir del 1º de octubre de 2015»* (pág. 37 arch. 1.1.3); sin embargo, en el nuevo contrato de prestación de servicios reseñado con el n.º. 7 nuevamente se le impuso a la contratista independiente la afiliación y pago de tales aportes en salud, pensión y riesgos laborales, como en todos los demás contratos aquí reseñados y así lo tenían en claro todos los testigos que rindieron su declaración ante la *a quo*.

La independencia se torna aún más notoria si se analiza el dicho de cada testigo con la información plasmada en las cuentas de cobro que la demandante presentó a Asperla entre el 31 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 (páginas 56 a 67, 76 a 96 del arch. 1.1.3.), en las que relacionó el número de consultas de atención terapéutica, el auxilio telefónico para localización de usuarios, el auxilio de transporte para usuarios, el transporte para asistencia estudios de casos de los usuarios del programa y según las notas allí registradas, anexó los pagos de aportes a seguridad social y solicitó la retención en la fuente sobre los ingresos gravados de conformidad con el art. 17 de la Ley 1819 de 2016; no obstante, aun cuando estas cuentas de cobro se presentaron en forma mensual, no siempre eran los mismos valores en uno y otro mes pues el número de consultas cobradas oscilaba entre 42 y 156, lo que sucede igualmente con las

cuentas de cobro que obran en las páginas 68 a 75 que fueron presentadas entre y el 29 de abril y el 30 de noviembre de 2015, en las que además de los conceptos indicados, la demandante cobró el rubro denominado “*arriendo aparta estudio amoblado*” y en mayo de 2015 adicionó el de “*refrigerios actividad grupal*”, mientras que en octubre de 2016 agregó conceptos como servicios públicos energía y acueducto de Rionegro, caja organizadora de juguetes, termómetro, soporte e instalación de extintor, logística para visita del ICBF en la licencia de funcionamiento de Rionegro.

Lo anterior confirma los relatos de los testigos en cuanto a que el valor de los honorarios dependía del número de consultas que la demandante atendiera en el mes, sin que fuera una camisa de fuerza el cumplir con un número determinado de citas con los usuarios, pues hubo varias cuentas de cobro en las que la demandante relacionó atenciones en un número inferior a 100 y aun así, como lo afirmaron los testigos, nunca tuvo llamados de atención por ello, con lo que debía cumplir para obtener el pago, era con presentar los informes de dichas atenciones y las constancias del pago a la seguridad social, como una obligación legal impuesta en los contratos de prestación de servicios.

Por último, resulta necesario señalar que a pesar de que la demandante y los testigos afirmaron que en algunas ocasiones, era el ICBF quien suministraba las instalaciones e implementos básicos de trabajo, ello se debió al contrato administrativo de aportes que ligó a los codemandados regulado por los arts. 21 de la Ley 7ª de 1979, 127 y 128 del Decreto Reglamentario 2388 de 1979, que aun cuando no fue aportado con ninguna de las contestaciones, el ICBF admitió tal situación al contestar la demanda, vínculo al que dicho sea de paso, no le son aplicables las normas del derecho individual del trabajo (CSJ SL4430-2018), de manera que de esta situación no se puede desprender que, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, se pudo hipotéticamente haber ejecutado un servicio por parte de la demandante en favor del ICBF. Nótese cómo los testigos afirmaron que a pesar de que el ICBF estableció lineamientos para la prestación de los servicios, nunca tuvo injerencia en su ejecución, pues precisamente la normativa en cita, señala que la actividad o prestación del servicio público se cumple bajo la exclusiva responsabilidad autónoma de la institución con la que contrata mediante recursos del Estado; además, afirmaron todos los testigos que el ICBF solo visitó los centros zonales una o dos veces al año para efectos de otorgar las respectivas licencias de

funcionamiento o en su defecto, para poder llevar a cabo la supervisión del contrato administrativo que suscribió con Asperla.

Por consiguiente, con las pruebas reseñadas, no puede darse por probado que la demandante estuviera vinculada con Asperla a través de un contrato de trabajo en los extremos señalados en la demanda, y si bien prestó sus servicios como psicóloga, la verdad es que la labor ejecutada fue de carácter independiente, sin que en ello tuviera injerencia Asperla y mucho menos el ICBF; así las cosas, teniendo en cuenta que se acreditó la autonomía e independencia que tuvo Elizabeth Ramírez Vargas, quedó desvirtuada la presunción de subordinación del art. 24 del CST, que se activó al acreditar la prestación del servicio, y en consecuencia, se colige que no fue una relación de carácter dependiente y continua la que la ató a Asperla, sino la existencia de una coordinación de actividades para ejecutar la atención profesional de los niños, niñas y adolescentes remitidos por el ICBF dentro del programa de atención terapéutica, que de ninguna manera genera el pago de prestaciones sociales; en consecuencia, se **confirmará** la decisión apelada.

Finalmente se ha de indicar que no es posible adentrarse en la verificación de la declaratoria de la nulidad de la cláusula compromisoria insertada en la cláusula n.º 15 de todos los contratos reseñados que no fueron desacreditados, precisamente debido al análisis efectuado de la relación jurídica que se suscitó entre las partes.

En todo caso, en gracia de la discusión, no se encontró probado en forma idónea la ocurrencia de las causales de nulidad absoluta al tenor de lo dispuesto en el art. 1741 del CC, sin contar con que en la demanda dentro de ninguno de los supuestos fácticos que soportan las pretensiones con que se dio apertura a la controversia, se adujo vicio alguno en el consentimiento al tenor del art. 1508 del CC, como para que no hubiera entendido la demandante en calidad de contratista profesional en psicología, qué tipo de contratos estaba firmando con Asperla y en especial la citada cláusula.

Aceptar los móviles que trajo a colación la recurrente, comportaría variar los hechos con los cuales se trabó la Litis y además iría en contra de los principios de contradicción, congruencia y defensa y vulneraría los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de los cuales es titular también la parte demandada, por cuanto no se le brindó la oportunidad de controvertir desde un

comienzo y en la respectiva oportunidad procesal, ese preciso fundamento que sólo ahora en la impugnación pone de presente la parte actora al decir que dicha cláusula se comportó como una de adhesión a la que no podía oponerse y se vio en la obligación de firmar.

En estos términos queda estudiado el recurso de apelación. Sin costas en la alzada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia absolutoria consultada proferida el 10 de febrero de 2021 por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

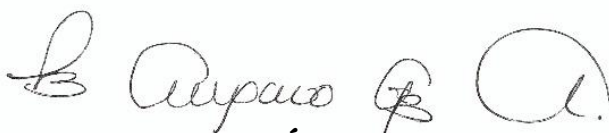
SEGUNDO: Sin costas en la alzada.

TERCERO: Esta sentencia se notificará a través de **EDICTO**, atendiéndose los términos previstos en el art. 41 del CPTSS.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada ponente



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
Magistrada

(*) Hipervínculo de consulta de expediente digitalizado:

<https://etbcsj->

[my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des17sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EpfpA3VvWvVKoUJBLiSeblsBtBx7LmL1wrBtGnxv6FJ93g?e=AvyYCd](https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des17sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EpfpA3VvWvVKoUJBLiSeblsBtBx7LmL1wrBtGnxv6FJ93g?e=AvyYCd)

Firmado Por:
Luz Patricia Quintero Calle
Magistrada
Sala 017 Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9aa17cde9f29cfb258237e0ccd923475bf60155d3e95b0774962b39c31e12ce**

Documento generado en 16/11/2023 10:49:37 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>